



Observatorio Social 2025

3º Trimestre

Observatorio Social 2025 3º Trimestre

Autor: Joseba G. Angulo, octubre de 2025.

Página	Índice
3	Introducción
4	Geo-política y Geo-economía
13	Sanidad Pública y Dependencia: los nuevos desafíos del bienestar del adulto mayor en España
19	Pensiones, la sostenibilidad del sistema público

Introducción

Nunca antes habíamos dispuesto de tanta ciencia, tanta capacidad médica, industrial y tecnológica... y, sin embargo, el mundo registra el mayor número de conflictos armados desde que hay datos comparables: 61 conflictos con participación de Estados en 2024, un récord que nos interpela como humanidad.

En el corazón de Europa, la guerra en Ucrania nos recuerda que ninguna frontera inmuniza contra el dolor ni contra la erosión de nuestras democracias. Da igual en que país sea pero cada central eléctrica dañada, cada hospital evacuado, cada familia desplazada, cada herido o muerto es una derrota que pesa en nuestra conciencia como civilización. Europa no puede limitarse a gestionar la inercia de la guerra: debe volver a liderar la búsqueda de la paz, debe recuperar liderazgo político y moral, sostener a la población civil, abrir vías creíbles de mediación, y trabajar sin descanso por un alto el fuego que abra paso a una paz justa y duradera.

En Palestina, la barbarie de Israel constituye un genocidio que hiere la conciencia del mundo. No hay desarrollo, ni seguridad, ni razón de Estado que justifique la destrucción masiva de vidas civiles. La prioridad es inequívoca: reconocer a Palestina su destino como nación independiente, alto el fuego definitivo, corredores humanitarios permanentes, reconstrucción de las vidas y ciudades rotas, y un horizonte político que haga viable la convivencia con garantías para todos. Europa debe abandonar la ambigüedad y liderar la paz, alineando su diplomacia, su ayuda y su comercio con el derecho internacional y la protección efectiva de la vida.

Al mismo tiempo, la beligerancia de la extrema derecha erosiona la convivencia: instrumentaliza el miedo, trivializa el dolor de las víctimas y promueve políticas de “re-inmigración” o repatriación forzosa que niegan derechos y alimentan la deshumanización. Nada hay más contrario a la seguridad que quebrar la dignidad. La paz exige un lenguaje que cuide, políticas de integración con derechos y deberes, cooperación en origen y rutas legales y seguras; exige reconocer que una migración bien gestionada aporta demografía, economía y creatividad a nuestras sociedades.

Este es el punto: sin paz no hay futuro. ¿De qué sirve vivir quizá el mejor momento de la humanidad en términos de transformación médica, industrial o tecnológica si no somos capaces de trasladar esos avances a detener las guerras, combatir la pobreza y reducir la desigualdad social? El progreso tecnológico avanza más rápido que el progreso humano: es nuestro deber cerrar esa brecha, gobernar la técnica, la inteligencia artificial con valores y orientar recursos, talento e instituciones hacia la protección de la vida y la construcción de una paz con justicia. Sólo así podremos hablar, con verdad, de progreso compartido.



A conceptual image showing a globe with chess pieces placed on it, symbolizing global strategy and geopolitics. The globe is tilted, showing the Americas and Europe. Several chess pieces are positioned on the globe: a king, a knight, a pawn, a bishop, and a queen. The background is dark with a bright light source creating a lens flare effect.

Geo-política y Geo-economía

Resumen ejecutivo

Pulso económico mundial. La actividad global cerró el 3.º trimestre con una expansión moderada. El impulso provino del adelanto de compras ante posibles subidas arancelarias y de un consumo de servicios todavía resistente. Para el 4.º trimestre se espera desaceleración suave por enfriamiento del comercio de bienes y menor inversión.

Política monetaria. La Reserva Federal de Estados Unidos inició recortes graduales de tipos en septiembre; el Banco Central Europeo mantuvo los suyos mientras confirma la senda de desaceleración de la inflación.

Cadenas de suministro y energía. El mar Rojo siguió tensionado, elevando tiempos y costes de tránsito; el mercado de petróleo apunta a equilibrio con prima de riesgo geopolítico; el gas en Europa dependerá del invierno y de la competencia por cargamentos de gas natural licuado.

Europa. La actividad mejora levemente (los servicios la sostienen, la industria arrastra algún problema). La política comercial se endurece en sectores estratégicos (vehículos eléctricos de batería, tecnologías verdes) y gana peso la base industrial de defensa.

España. El 3.º trimestre llega con inercia favorable: empleo elevado, turismo fuerte, inflación contenida. Los riesgos inmediatos vienen del exterior (energía, logística y comercio europeo).

Geopolítica. Persisten conflictos sin solución cercana (Ucrania; Gaza...) tensiones marítimas en el mar Rojo y fricción en el Indo-Pacífico. En el Sahel se consolida la fragmentación de la seguridad.

Llamamiento a la paz y a la autonomía europea. En Oriente Próximo y en Ucrania, proteger a la población civil, sostener corredores humanitarios y activar mediación requieren una Europa con voz propia, capaz de liderar una hoja de ruta de paz sin estigmas ni subordinación estratégica a agendas ajenas.

¿Dónde estamos?

Amanece sobre un mapa lleno de grietas. Las rutas del comercio esquivan el mar Rojo por el Cabo de Buena Esperanza; los trenes de mercancías cruzan una Europa que se acostumbra a la incertidumbre; y, al mismo tiempo, nuestros hospitales trasplantan órganos con precisión milimétrica y los laboratorios modelizan fármacos con una velocidad que habría parecido magia hace solo una década. Nunca supimos tanto, nunca fuimos tan capaces... y, sin embargo, convivimos con el mayor número de conflictos armados en generaciones. Las últimas

estadísticas globales hablan de decenas y decenas de guerras activas, un ruido de fondo que amenaza con convertirse en banda sonora permanente.

En el corazón de Europa, la guerra de Ucrania nos recuerda que ninguna frontera inmuniza del dolor. Las sirenas vuelven a sonar cuando se acerca el invierno y las infraestructuras civiles —centrales eléctricas, hospitales, agua— reaparecen como objetivos. Esta realidad nos obliga a una frase sencilla y exigente: Europa debe volver a liderar la vía de la paz. Liderar no es resignarse ni mirar a otro lado: es proteger a la población civil, sostener la ayuda, abrir mediaciones verosímiles y preparar la reconstrucción temprana que devuelva dignidad a la vida cotidiana.

En Palestina, la barbarie de Israel constituye un genocidio que hiere la conciencia del mundo. Ningún cálculo geopolítico puede justificar la destrucción masiva de vidas civiles. La prioridad es inequívoca: alto el fuego, corredores humanitarios estables, liberación de palestinos detenidos, y un horizonte político que haga viable la convivencia con garantías para todos.

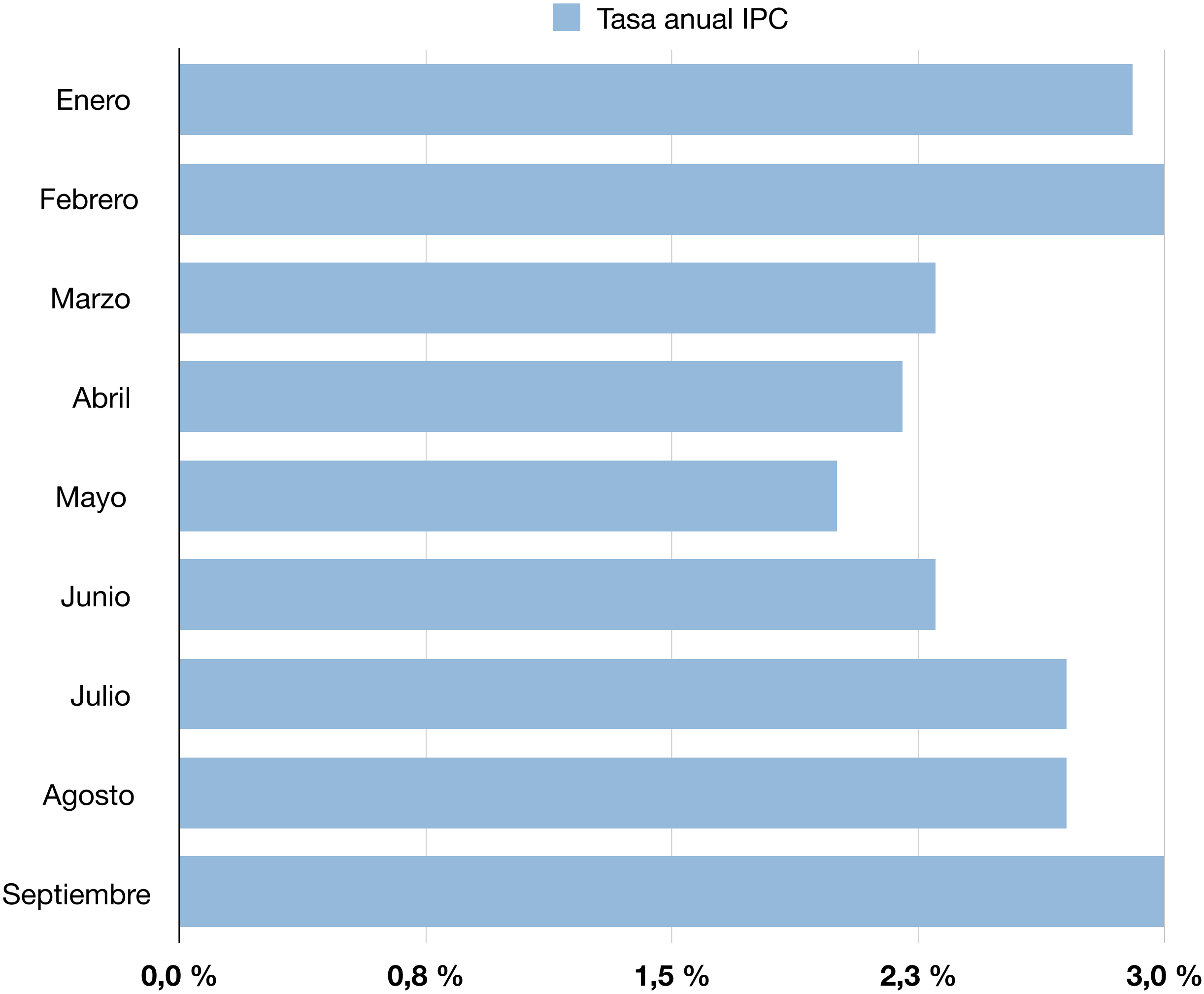
Este llamamiento a la vida exige también claridad dentro de nuestras fronteras: la beligerancia de la extrema derecha trivializa el dolor e instrumentaliza el miedo; las políticas de “re-inmigración” o repatriación forzosa niegan derechos y deshumanizan. Una migración bien gestionada suma, romper vínculos, en cambio, solo alimenta el resentimiento.

También nos atraviesa otra herida silenciosa: el avance de la pobreza y la desigualdad, con especial crudeza en las personas mayores. El envejecimiento sin redes suficientes expone a demasiada gente a la soledad, a la precariedad energética y habitacional, y a un mercado que con frecuencia les vuelve invisibles. El edadismo —esa discriminación por motivo de edad— encoge la dignidad y mutila el talento social disponible. Una sociedad que margina a sus mayores se empobrece a sí misma.

La tecnología, la IA, avanza más deprisa que nuestras capacidades éticas, culturales e institucionales: nos toca cerrar esa brecha y gobernar la técnica, la IA, con valores, ética, inclusividad y regulación.

Evolución del IPC

Mes	Tasa anual %	Comentario
Enero	2,9 %	Inicio del año.
Febrero	3,0 %	Ligero aumento respecto a enero.
Marzo	2,3 %	Moderación de la inflación.
Abril	2,2 %	Continuación de moderación.
Mayo	2,0 %	Inflación baja al nivel más bajo del año.
Junio	2,3 %	Ligeramente al alza de nuevo.
Julio	2,7 %	Subida moderada.
Agosto	2,7 %	Estabilidad respecto a julio.
Septiembre	3,0 %	Nuevo repunte en la tasa anual.



Una economía que respira y tose a la vez

El trimestre dejó una economía mundial de dos velocidades. Por un lado, los servicios siguen tirando del carro —viajes, ocio, cuidado, tecnología aplicada a la vida cotidiana—; por otro, la industria avanza con paso corto, midiendo cada inversión y extremando el control de existencias. Las empresas adelantaron pedidos por temor a nuevas barreras comerciales y mantuvieron inventarios de seguridad para capear sobresaltos. La herida del Mar Rojo no cicatriza: desviar por el Cabo de Buena Esperanza alarga días y encarece fletes y seguros marítimos; el reloj de la logística se volvió caprichoso, y cada demora se multiplica a lo largo de la cadena. En la energía, el petróleo coqueteó con el equilibrio mientras la prima de riesgo subía y bajaba al ritmo de los titulares. Europa entra en el invierno con almacenamientos de gas razonables, pero muy sensibles a la temperatura y a la competencia por cargamentos licuados. En las mesas de dirección se oye la misma consigna, repetida con diferentes acentos: prudencia en la inversión, cobertura parcial de energía y diversificación de rutas y proveedores.

Europa camina por una cornisa: los servicios sostienen el pulso, la industria del corazón manufacturero acusa el ciclo y la inflación desciende sin prisa, con los servicios aún tensos. El Banco Central Europeo prefiere escuchar a los datos antes de moverse: no hay márgenes para la euforia, pero sí para ordenar la transición desde un dinero caro hacia un dinero menos exigente si los precios acompañan. En paralelo, la política comercial endurece el gesto en sectores estratégicos —vehículos eléctricos, tecnologías limpias, redes— y la conversación sobre base industrial de defensa salta del atril al taller: no se trata de militarismo, sino de constatar que las guerras largas consumen capacidades que Europa debe poder reponer sin pedir permiso.

España llega a este cruce con músculo en el empleo, una renta salarial real que recupera terreno y un turismo que sostiene gasto y recaudación. La inflación, contenida pero obstinada en algunos capítulos, obliga a vigilar la energía y los alimentos; la vivienda pesa en los bolsillos, sobre todo el alquiler en grandes ciudades. La inversión empresarial no desaparece, pero se vuelve selectiva: automatización que ahorra costes, logística más flexible, inteligencia artificial para mejorar procesos, y proyectos de transición energética que maduran cuando hay contratos estables. Las pymes sienten la presión de costes y la incertidumbre de demanda exterior; amortiguan con cercanía al cliente y cooperación en cadenas locales.

El conflicto como telón de fondo

La geopolítica del trimestre fue la de una fricción persistente. En Ucrania, la línea del frente se movió poco, pero el desgaste creció: ataques en profundidad de un lado, avances graduales del otro, y la sensación de que el tiempo —la munición, la defensa antiaérea, la reconstrucción de

redes— se ha convertido en un factor de batalla. En el mar Rojo y el golfo de Adén, los ataques a la navegación no cesaron; escoltas navales y rutas alternativas se normalizaron como si la excepcionalidad hubiera venido para quedarse. En Palestina continúa el genocidio mientras el mundo mira para otro lado. En el Indo-Pacífico, China mantuvo ejercicios alrededor de Taiwán y aumentaron los roces con Filipinas en el mar de China Meridional. En el Sahel, la salida de misiones internacionales y el reordenamiento de alianzas consolidaron un vacío peligroso que se traduce en violencia, contrabando y nuevas rutas migratorias. EE.UU. no se olvida de Latinoamérica, continua hostigando a Venezuela y Colombia, parece que vuelve a mirar a su patio trasero.

Europa, en medio de este tablero, corre el riesgo de confundir capacidad con subordinación. La autonomía estratégica no es un eslogan ni un repliegue: es la madurez de decidir por nosotros mismos, cooperando con aliados cuando convenga, pero sin delegar nuestra brújula moral. Eso implica tres verbos sencillos: proteger, mediar, reconstruir. Proteger a la población civil, mediar con paciencia, reconstruir desde el primer día.

Europa, voz propia

Una Europa que aspire a liderar la paz no puede limitarse a ampliar presupuestos de defensa: debe coser diplomacia, cooperación, comercio y energía en una misma estrategia. En Palestina, esto significa alinear ayuda, reconocimiento político y condicionalidad con el derecho internacional y el alivio humanitario sostenido.

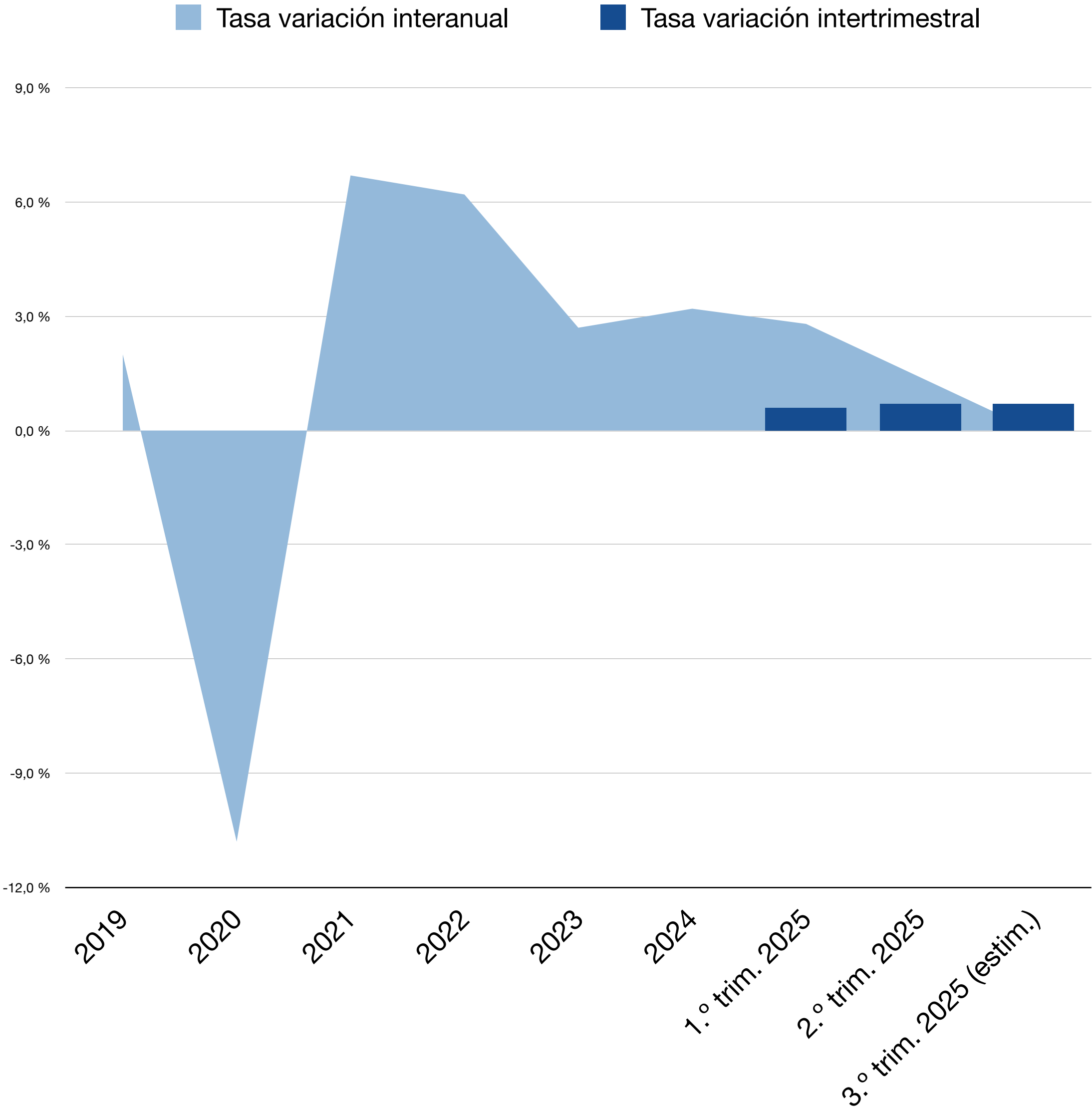
En Ucrania, significa apoyar la defensa de la vida —protección civil, desminado, reparación de redes— y abrir, mediaciones que preparen un alto el fuego digno para las víctimas. En el mar Rojo, significa mantener una seguridad marítima estrictamente defensiva que proteja a los mercantes sin empujar a una guerra abierta. En el Sahel, significa invertir en seguridad humana: agua, salud, escuelas, oportunidades y Estado de derecho, porque sin eso todo lo demás es un castillo de arena.

España tiene una voz que importa. Vivimos en una encrucijada de rutas atlánticas y mediterráneas, somos potencia turística y exportadora de servicios, y nuestra estabilidad social es una ventaja estratégica. Liderar dentro de la Unión pasa por sostener con claridad la solución de dos Estados en Palestina, por empujar mediaciones útiles en Ucrania y por redoblar la cooperación con Magreb y Sahel en seguridad, empleo y gobernanza. También por decir en voz alta que la migración no es una amenaza, sino un desafío de gestión: con derechos y deberes, con vías legales y seguras, con integración real y lucha frontal contra las mafias que trafican con personas.

Evolución del PIB

Periodo	Tasa variación interanual	Tasa variación intertrimestral
2019	2,0 %	
2020	-10,8 %	
2021	6,7 %	
2022	6,2 %	
2023	2,7 %	
2024	3,2 %	
1.º trim. 2025	2,8 %*	0,6 %*
2.º trim. 2025		0,7 %*
3.º trim. 2025 (estim.)		0,7 %*

* Previsiones para el año 2025, estimaciones.



Mirando al cuarto trimestre

Se acerca el invierno y con él una pregunta esencial: ¿seremos capaces de bajar el volumen de la guerra y subir el de la cooperación? Si el tiempo acompaña y las rutas se estabilizan, la economía podrá cerrar el año con una desaceleración manejable. Si, por el contrario, el mar Rojo se incendia o el frente oriental apunta a las redes energéticas, veremos precios más volátiles y márgenes más estrechos. En cualquier caso, la tarea es la misma: resiliencia en logística y energía, prudencia en las decisiones financieras y, sobre todo, coherencia política en la defensa de la vida.

Porque, al final, todo se resume en esto: sin paz no hay futuro. Y si de verdad estamos viviendo el momento de mayor transformación médica, industrial y tecnológica de nuestra historia, hagamos que esa fuerza sirva para salvar vidas, reducir la pobreza y acercar la igualdad.

Que el progreso no sea una carrera de máquinas, sino una marcha de seres humanos. Solo entonces podremos decir que hemos estado a la altura de nuestro tiempo.

Una mirada a nuestro País

Fuentes clave

- IPC septiembre 2025: 3,0%; subyacente 2,4%; tasa mensual –0,3%; IPCA 3,0%. INE
- PIB 2T-2025 (dato final): +0,8% trimestral; +3,1% anual. INE
- PIB 3T-2025: estimación en torno a +0,7% tercer trimestre.
- Previsiones 2025: Banco de España: 2,6% PIB y 2,5% IPC; BBVA Research: 3,0%; Funcas: 2,9% 2025 y 1,9% 2026.

España, verano de cifras y otoño de certezas

El verano dejó a España avanzando con paso firme. La inflación volvió a levantar ligeramente la cabeza en septiembre, hasta el 3,0% interanual, mientras la subyacente se mantuvo en 2,4%. Fue un mes típicamente “de respiro”: el índice general cayó un 0,3% respecto a agosto, con el turismo ya de retirada y el vestido y calzado marcando el cambio de temporada. Transportes y vivienda tiraron al alza —por carburantes y electricidad—, pero sin desbocarse. La foto de julio y agosto fue más contenida (2,7% en ambos casos), de modo que el trimestre cierra con una inflación en torno al 2,8–3,0%, con la parte más pegajosa en servicios y alquileres.

En actividad, el curso venía bien encarado desde primavera. El segundo trimestre quedó finalmente en +0,8% trimestral (+3,1% interanual) tras la revisión de finales de septiembre, con

la demanda interna llevando la batuta y la aportación exterior más débil. Ese empuje es el que riega el tercer trimestre: los modelos en tiempo real y las casas de análisis que siguen el pulso de alta frecuencia sitúan el 3T de nuevo en torno al +0,7% t/t, un ritmo muy similar al de los trimestres previos. No es un fogonazo: es tracción constante, sostenida por empleo alto, turismo fuerte y consumo que recupera poder adquisitivo.

Con el otoño llegan las miradas largas. El Banco de España sitúa el crecimiento 2025 en torno al 2,6% (y 2,5% de inflación media), un escenario de “normalidad tensa” donde el consumo y la inversión tiran, pero sin excesos. Otros servicios de estudios —BBVA Research y Funcas— ven incluso un tono algo más vivo (3,0% y 2,9% respectivamente), a costa de reconocer que 2026 sería más templado (~2,3% BBVA; 1,9% Funcas). Entre líneas, todos coinciden en lo esencial: si la energía no se desmanda y las rutas marítimas no vuelven a torcerse, España puede cerrar 2025 por encima del área euro y encarar 2026 con una desaceleración ordenada.

En precios, el cierre del año dependerá de dos resortes: el invierno energético europeo y los fletes vinculados al Mar Rojo. Con un otoño benigno y sin sobresaltos logísticos, el IPC puede oscilar en la franja 2,5–3,0% a finales de año; si el frío aprieta o el seguro marítimo vuelve a encarecerse, la aguja se quedará más cerca del 3%. Por ahora, el patrón es claro: desinflación lenta en la subyacente, con servicios como colchón y alimentos/energía marcando los dientes de sierra.

Mientras tanto, la maquinaria real de la economía —hogares y empresas— sigue ajustando: más ahorro energético, más automatización selectiva, más diversificación de proveedores. No es épica, es artesanía: contratos de luz más listos, pólizas de transporte mejor pensadas, inversión en lo que de verdad ahorra tiempo y costes. Con eso, y con un mercado laboral que aguanta, el relato de 2025 es el de un país que respira y tose a la vez, pero que no pierde el paso.

En el mercado de trabajo, el final del verano no trajo el frenazo habitual: septiembre cerró con 2.421.665 personas inscritas en paro, 4.846 menos que en agosto, el mejor septiembre desde 2007, y un descenso interanual del 6% (–153.620 personas). La palanca está también en el lado del empleo: la afiliación a la Seguridad Social superó los 21,7 millones en septiembre (serie ajustada), uno de los mejores registros de la serie, con un avance interanual del 2,3%. Para el conjunto de 2025, Bruselas prevé una tasa de desempleo alrededor del 10,4%: alta en términos europeos, pero en trayectoria descendente si la creación de empleo aguanta.

En las cuentas públicas, España navega el nuevo marco fiscal europeo sin estar entre los países con procedimiento de déficit excesivo abierto este curso —el Consejo lo activó para siete Estados y España no figura—, mientras la Comisión estima para 2025 un déficit del 2,8% del PIB y una deuda rondando el 101% del PIB, en una senda suave de reducción.

El Gobierno, por su parte, ha constituido un “colchón” de 7.300 millones (≈0,5% del PIB) en la llamada cuenta de control para absorber eventuales desviaciones de la regla de gasto. Además, el ciclo de medidas anticrisis se va retirando: la rebaja del IVA a alimentos y a la energía se desactivó a final de 2024, con la reversión gradual que había anunciado Hacienda. Todo ello dibuja una política fiscal más normalizada en 2025: menos ayudas generalistas, preservando margen ante shocks y con la regla de gasto como ancla.

En el terreno social, la fotografía mejora, pero no autoriza complacencias. El indicador AROPE —población en riesgo de pobreza o exclusión— bajó al 25,8% en 2024 (datos de renta 2023), el mejor registro desde 2008; la tasa de riesgo de pobreza quedó en el 19,7%, y la carencia material y social severa descendió al 8,3%. Entre los mayores de 65 años hay dos realidades que conviene leer a la vez: el AROPE se situó en el 19,5% y la tasa de pobreza en el 16,9%, ambas a la baja frente al año previo. Es decir: el sistema de pensiones amortigua, pero no borra vulnerabilidades (especialmente soledad, vivienda y energía).

El reto es doble: consolidar la mejora agregada y, a la vez, atacar el “edadismo” económico que deja a parte de los mayores en la cuneta, poniendo el acento en pensiones suficientes, servicios de cuidados, eficiencia energética en hogares y garantías de ingresos complementarios donde sean necesarios.

Grupo de edad	2023 (tasa AROPE)	2024 (tasa AROPE)	Variación 2023/2024
< de 16 años	34,3 %	34,7 %	+0,4 puntos
De 16 a 64 años	26,4 %	25,8 %	-0,6 puntos
65 años y más	20,9 %	19,5 %	-1,4 puntos

Evolución de la Pobreza y Desigualdad

Inmigración, abandono institucional y el peligro del nuevo populismo identitario

En el debate público sobre la inmigración conviven el miedo, la confusión y, a menudo, una peligrosa simplificación. Se dice, sin mucho matiz, que la inmigración “interesa” porque proporciona mano de obra barata, que todos los partidos están de acuerdo en permitir entradas sin control, y que esta situación conlleva una degradación inevitable de los derechos laborales y sociales. Esta narrativa, aunque popular en ciertos círculos, distorsiona la realidad y bloquea el diseño de políticas migratorias responsables y sostenibles.

La inmigración no es un fenómeno aislado ni nuevo. Es la manifestación humana de desequilibrios globales profundos: desigualdad económica, conflictos armados, efectos del cambio climático, regímenes autoritarios, y modelos de desarrollo que dependen de la extracción de recursos y talento del sur global. La gente no migra por capricho, sino por necesidad. Mientras tanto, los países receptores —sobre todo los más desarrollados— enfrentan déficits demográficos, falta de mano de obra en sectores clave y mercados laborales que, paradójicamente, necesitan lo que dicen querer rechazar.

Es cierto que determinadas industrias, como la agricultura intensiva, la construcción o el trabajo doméstico, se benefician de una fuerza laboral inmigrante contratada en condiciones de informalidad absoluta tanto salarial, contractual, si llega el caso, como jurídica o social. Pero no se puede concluir que la inmigración necesariamente degrada los derechos laborales. Ahora bien, lo que sí produce esa degradación es la absoluta ausencia de políticas de integración, la irregularidad como norma, y la permisividad frente a la explotación. La inmigración solo se convierte en una herramienta de precarización si se gestiona mal, si se acepta que millones de personas vivan y trabajen sin papeles, sin derechos y sin voz.

Aquí entra el segundo gran mito: que “todos los partidos” están de acuerdo en permitir una inmigración sin control. Basta observar el panorama político europeo o latinoamericano para desmontarlo. Las posiciones partidarias van desde el cierre de fronteras, la criminalización del inmigrante o la externalización del control migratorio a países terceros, hasta modelos más abiertos y humanitarios, basados en el reconocimiento de derechos y en políticas activas de integración. No hay consenso, y menos aún en favor del descontrol. Lo que sí hay, a menudo, es incoherencia entre el discurso político y la práctica administrativa.

El retorno del viejo veneno: la “re-migración”

En este escenario, la extrema derecha ha desempolvado conceptos del pasado que deben hacer que nos pongamos en alerta. Uno de ellos es el de re-migración, una idea que propone

expulsar no solo a inmigrantes irregulares, sino también a ciudadanos extranjeros legalmente residentes, e incluso nacionalizados, cuando no nacidos en el país, si no se consideran “asimilados” a la cultura dominante. Este planteamiento, impulsado por movimientos identitarios de extrema derecha en Francia, Alemania y otras partes de Europa, tiene raíces doctrinales claramente totalitarias, fascistas.

El término, bajo una apariencia técnica o política, esconde una forma de limpieza étnica: se plantea que ciertos grupos son “incompatibles” con la nación, y por tanto deben ser devueltos a sus países de origen. Esta lógica no es nueva nos remite de nuevo a las políticas de exclusión racial del nazismo, al apartheid y a otras formas históricas de segregación institucionalizada. Cambia la retórica, pero la idea es la misma: homogeneizar a través del miedo, de la exclusión y del nacionalismo étnico.

Frente a esto, debemos defender un principio democrático esencial: la ciudadanía no se mide por el origen, el color o el nombre, sino por la participación igualitaria en una comunidad de derechos y deberes. Aceptar la “re-migración” como opción legítima es cruzar una línea peligrosa, no solo jurídica, sino moral.

Abandono institucional, bulos y el auge del populismo

Casos como el de Torre Pacheco (Murcia) son el reflejo de una realidad repetida en muchos rincones de Europa y América Latina: barrios o municipios con alta población migrante, infra-financiados, sin servicios sociales suficientes, sin recursos escolares ni sanitarios adecuados, y sin capacidad real o no de los gobiernos locales para implementar políticas sociales inclusivas. En este contexto, la precariedad se convierte en objetivo, no como resultado de la inmigración, sino de la falta de inversión pública, el vaciamiento del Estado social y la desconexión entre las instituciones y el territorio. Así, muchas veces se culpa a quien llega, no a quien ha abandonado.

Este caldo de cultivo es ideal para los discursos de la extrema derecha, que canalizan la frustración y la angustia hacia el odio, señalando al inmigrante como chivo expiatorio. Los bulos —como que “los de fuera reciben más ayudas que los de aquí”, o que “se les paga por no trabajar”— circulan sin freno en redes sociales, y calan en poblaciones golpeadas por la crisis, que ven cómo sus condiciones materiales empeoran sin comprender las causas estructurales.

La percepción, no siempre real, de agravio comparativo entre “los nuestros” y “los otros” solo puede combatirse con datos, con pedagogía democrática y, sobre todo, con políticas públicas valientes que inviertan en barrios olvidados, mejoren la convivencia y garanticen derechos iguales para todos. Porque no hay peor combustible para el odio que la desigualdad gestionada de manera consciente.

Políticas para construir futuro

Los problemas migratorios reales surgen cuando no se diseña una política integral. Dejar entrar sin regularizar, permitir la economía informal como válvula de escape, y desatender la integración cultural, educativa y laboral no solo perjudica a los inmigrantes, sino que alimenta la desconfianza social, la competencia por recursos limitados y la polarización. Sin embargo, cuando hay derechos, normas claras y oportunidades reales de inserción, la inmigración puede ser una palanca de dinamismo económico, cohesión social y diversidad cultural.

Pero la solución no puede limitarse al país receptor. Es fundamental actuar también en los países de origen, pero no desde la lógica punitiva ni de externalización de fronteras, sino desde un compromiso real con el desarrollo justo y la paz duradera.

Invertir en origen no es contradictorio, es imprescindible. Se trata de crear condiciones dignas de vida, evitar guerras, estabilizar regiones, apoyar procesos democráticos y fomentar economías sostenibles. Las migraciones no se detendrán nunca, ni deben, pero una parte significativa de los desplazamientos forzados podrían evitarse si existieran infraestructuras básicas, acceso a la educación, al agua, a los alimentos, al trabajo y a la seguridad personal.

Eso requiere una profunda revisión de las relaciones internacionales, comerciales y geopolíticas. No se puede predicar el desarrollo mientras se sostienen acuerdos que empobrecen o se toleran guerras que desangran países. Resolver en origen no es cerrar puertas, sino abrir horizontes desde la justicia y la cooperación internacional.

Una llamada a la responsabilidad democrática

La inmigración no debe analizarse desde la sospecha ni desde el oportunismo político. Requiere una mirada larga, ética y estratégica. Necesitamos políticas migratorias que combinen el control legal con la garantía de derechos, la integración con la exigencia de responsabilidades, y el compromiso internacional con la justicia social.

Y, sobre todo, necesitamos valentía moral para denunciar los discursos que deshumanizan, estigmatizan o promueven fórmulas ideológicas peligrosas como la “re-migración”. La historia ya nos mostró adónde conducen. La democracia se defiende también en cómo tratamos al otro, especialmente si es vulnerable. Porque al final, no se trata solo de inmigración, la cuestión es más profunda, es ideológica, se trata de qué tipo de sociedad queremos ser.



Emigrantes españoles a Alemania, finales de 1950.



Sanidad Pública y Dependencia: los nuevos desafíos del bienestar del adulto mayor en España (2025)

Sanidad Pública y Dependencia: los nuevos desafíos del bienestar del adulto mayor en España (2025)

1. Introducción: el espejo del bienestar envejecido

En España, más de 9,7 millones de personas superan los 65 años, y por primera vez en la historia, la población mayor crece a un ritmo más rápido que la activa. Este cambio demográfico, lejos de ser solo una cifra estadística, se ha convertido en un espejo del bienestar real de la sociedad: cómo tratamos a nuestros mayores revela el tipo de contrato social que sostenemos.

Durante décadas, España fue referente europeo en esperanza de vida y en la fortaleza de su sanidad pública, una de las más valoradas del continente. Sin embargo, en 2025 ese modelo muestra signos evidentes de fatiga. Las tensiones estructurales del sistema sanitario, agravadas tras la pandemia y no corregidas en los años siguientes, han derivado en listas de espera históricas, una crisis de personal sanitario y un retroceso en los programas de prevención, especialmente en los cribados oncológicos. Al mismo tiempo, el Sistema de Atención a la Dependencia continúa acumulando demoras que dejan a decenas de miles de personas sin la atención o el apoyo económico que la ley les reconoce.

Ambos fenómenos —la fragilidad de la sanidad pública y la insuficiencia del sistema de dependencia— confluyen en un mismo punto: la vulnerabilidad creciente del adulto mayor. Lo que en su origen fueron pilares del Estado del Bienestar se están convirtiendo en indicadores de desigualdad territorial y social. Las diferencias entre comunidades autónomas en acceso a servicios, tiempos de espera o intensidad de las prestaciones dibujan un mapa desigual de derechos que afecta, sobre todo, a quienes menos capacidad tienen para defenderlos.

En este contexto, la defensa de la sanidad pública y la atención a la dependencia no son solo debates sectoriales: son debates sobre la dignidad en la vejez, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del modelo social español. El Observatorio Social recoge estas tensiones no como una mera crisis coyuntural, sino como la señal de un cambio estructural que exige repensar las prioridades colectivas.

2. Sanidad pública: la defensa de un modelo tensionado

En 2025, la sanidad pública española vive un punto crítico. Lo que fue durante décadas un modelo de referencia internacional por su carácter universal y equitativo, atraviesa ahora un proceso de tensión estructural que combina tres factores interrelacionados: presión demográfica, reducción presupuestaria y privatización progresiva. El resultado es una sanidad

más fragmentada, desigual y dependiente de la renta de los ciudadanos, especialmente visible en la población mayor.

2.1. La presión demográfica y el cambio del perfil asistencial

España mantiene una de las mayores esperanzas de vida del mundo, con más de 83 años de media y una tasa de envejecimiento que supera el 21%. El incremento de enfermedades crónicas, la pluripatología y la dependencia funcional han transformado la demanda sanitaria. Sin embargo, el sistema sigue anclado en una estructura hospitalaria y curativa, poco adaptada a la cronicidad y a la atención comunitaria. La falta de inversión en atención primaria y en salud pública ha desplazado recursos hacia los niveles más costosos del sistema, generando un efecto embudo: urgencias saturadas, seguimiento deficiente y pérdida de capacidad preventiva.

2.2. Reducción presupuestaria y desigualdad territorial

Aunque el gasto sanitario público se mantiene en torno al 7,1% del PIB, en términos reales se ha reducido en un 6% desde 2021, descontando la inflación y el crecimiento poblacional. Esta contracción no es uniforme: las comunidades autónomas con gobiernos conservadores han aplicado políticas de contención presupuestaria y externalización de servicios, priorizando la eficiencia económica sobre la equidad territorial. En algunas de ellas, el gasto por habitante se sitúa un 20% por debajo de la media nacional, afectando especialmente a la atención primaria, la salud mental y los programas de cribado preventivo. El resultado es un mapa sanitario desigual: ciudadanos con derechos teóricamente iguales reciben servicios muy diferentes según su código postal.

2.3. Privatización progresiva y pérdida de control público

La consecuencia más visible de esta política es la creciente privatización de la asistencia sanitaria. En 2025, más del 30% de los fondos públicos destinados a salud se canalizan ya a través de contrataciones y conciertos con empresas privadas, especialmente en hospitales, diagnóstico por imagen, rehabilitación y servicios auxiliares. El proceso, amparado bajo el discurso de la “colaboración público-privada”, ha derivado en una transferencia de capacidad de gestión y de planificación sanitaria hacia grandes grupos empresariales del sector. En las comunidades con mayor grado de privatización, como Madrid o Andalucía, los hospitales de gestión privada atienden ya a uno de cada cuatro pacientes del sistema público. Paralelamente, el crecimiento de los seguros de salud privados —que ya cubren a más de 13 millones de personas— evidencia una doble velocidad sanitaria: la de quienes pueden pagar para evitar listas de espera y la de quienes dependen exclusivamente del sistema público.

2.4. Cribados oncológicos: el síntoma del deterioro

La reducción presupuestaria y la externalización tienen un reflejo directo en la prevención del cáncer, uno de los pilares históricos de la salud pública española. En los últimos tres años se ha observado una disminución de entre el 15% y el 20% en la cobertura de los programas de cribado de colon, mama y cérvix. Los retrasos en las citaciones, la falta de personal técnico y la desigualdad territorial han reducido la capacidad de detección temprana, especialmente en las zonas rurales y entre mayores de 70 años. El fenómeno es doble: menos prevención y más gasto hospitalario a largo plazo, un círculo que agrava tanto el coste económico como el sufrimiento humano.

2.5. Una crisis de gobernanza y de sentido público

Más allá de los datos, la sanidad pública atraviesa una crisis de gobernanza. La descentralización sin coordinación efectiva ha convertido el derecho a la salud en una competencia autonómica desigual. Pero, en el fondo, se trata de algo más profundo: una pérdida de sentido público. La salud, entendida durante décadas como un bien común, empieza a percibirse como un servicio que depende del poder adquisitivo o de la suerte geográfica. Desde la óptica del Observatorio Social, esta tendencia representa una amenaza directa para el contrato social intergeneracional, pues el adulto mayor —más dependiente del sistema público y con menor capacidad económica— se convierte en el principal afectado por una deriva que pone en riesgo la cohesión sanitaria y social del país.

3. Dependencia: el laberinto del cuidado

Si la sanidad pública refleja las grietas del modelo de bienestar, el sistema de atención a la dependencia muestra sus fallos más profundos. En 2025, casi 1,5 millones de personas tienen reconocido algún grado de dependencia en España, pero más de 300.000 siguen sin recibir la prestación o el servicio que les corresponde, según los datos del IMSERSO y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. A este colectivo se suma un número indeterminado de personas en lista de espera para valoración, lo que eleva el conjunto de desatendidos por encima de las 400.000 personas. Es la llamada “lista de la desespera”, un espacio donde el tiempo —esperar meses o años— se convierte en una forma silenciosa de exclusión social.

3.1. El déficit estructural del sistema

El sistema de dependencia nació en 2006 con la ambición de convertirse en el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”. Sin embargo, tras casi dos décadas, se encuentra infrafinanciado,

fragmentado y con desigual capacidad de respuesta.

El gasto público en dependencia ronda el 0,9% del PIB, muy por debajo de la media europea (1,6%), y su cobertura varía enormemente según la comunidad autónoma. Mientras regiones como Castilla y León o La Rioja mantienen niveles de atención superiores al 90%, otras, como Canarias o Andalucía, no alcanzan el 60%.

La falta de financiación estable, la complejidad burocrática y la alta rotación del personal técnico han convertido la gestión del sistema en un laberinto administrativo, donde la persona dependiente y su familia se enfrentan a un entramado de trámites, valoraciones y revisiones que a menudo superan su capacidad de respuesta.

3.2. El papel invisible de las familias y la feminización del cuidado

Detrás de la fragilidad institucional se esconde otro fenómeno más silencioso: la privatización informal del cuidado. Alrededor del 75% de las personas dependientes son atendidas principalmente por familiares, y en el 87% de los casos, son mujeres —madres, hijas o esposas— quienes asumen esa tarea. Este modelo de cuidado doméstico, no remunerado y apenas reconocido, reproduce una doble desigualdad: de género y de clase. Las familias con menos recursos no pueden recurrir a servicios privados o residencias, y las cuidadoras acaban sacrificando empleo, salud y vida social. Desde una perspectiva sociológica, el sistema de dependencia funciona gracias a una red invisible de cuidado femenino que sostiene lo que el Estado no financia. Esta carga invisible no solo empobrece a las mujeres, sino que perpetúa un modelo asistencialista, más centrado en el ahorro presupuestario que en el derecho efectivo a la autonomía personal.

3.3. El impacto en el bienestar del adulto mayor

Para el adulto mayor, la dependencia no es solo una cuestión física o económica: es una experiencia vital marcada por la pérdida de control, la soledad y la sensación de inutilidad social.

El retraso en la atención genera deterioro acelerado, institucionalizaciones forzadas y un aumento del malestar emocional. En los últimos años, diversos estudios alertan del crecimiento de los trastornos depresivos entre mayores en situación de dependencia o espera de ayuda, especialmente en entornos rurales donde los servicios son escasos. El sistema no solo falla en proveer cuidados: falla en reconocer la dignidad del tiempo vivido, reduciendo la vejez dependiente a una cuestión de gestión y coste.

3.4. Desigualdad territorial y modelo residencial

La gestión autonómica vuelve a ser determinante. En 2025, el acceso a plazas residenciales públicas o concertadas varía entre 4 y 9 por cada 100 mayores de 65 años, según el territorio. En regiones con menor oferta pública, se ha producido un crecimiento acelerado del sector privado residencial, muchas veces con estructuras empresariales transnacionales que priorizan la rentabilidad sobre la calidad del cuidado.

El modelo residencial español, aún anclado en grandes centros, ha mostrado sus límites tras la pandemia, sin una transición efectiva hacia modelos de proximidad o unidades de convivencia más humanas y sostenibles. El resultado es un sistema dual: cuidados de alta calidad para quien puede pagarlos, y espera o precariedad para el resto.

3.5. Una cuestión de dignidad social

La dependencia no puede seguir tratándose como un gasto social, sino como una inversión en dignidad colectiva. Su déficit no se mide solo en euros, sino en vidas deterioradas por la espera, en cuidadores agotados, y en una pérdida de cohesión social que erosiona la confianza en las instituciones.

Desde la perspectiva del Observatorio Social, el reto no consiste solo en aumentar el presupuesto, sino en redefinir la arquitectura del cuidado: integrar sanidad y servicios sociales, fortalecer la atención domiciliaria, reconocer profesionalmente el cuidado y garantizar la equidad territorial. La forma en que una sociedad cuida a sus mayores revela, con más claridad que cualquier otro indicador, su grado real de civilización.

4. Análisis transversal: vulnerabilidad y dignidad

La situación de la sanidad pública y de la atención a la dependencia no son dos crisis aisladas, sino manifestaciones complementarias de una misma fractura social: la pérdida progresiva del sentido colectivo del bienestar. Ambas esferas —la salud y el cuidado— formaban parte del núcleo moral y político del Estado social, concebidas como derechos universales y no como bienes transaccionables.

Hoy, sin embargo, el adulto mayor se enfrenta a un escenario donde esos derechos se condicionan por la renta, la geografía y el azar administrativo. Lo que antes era una garantía pública se convierte, cada vez más, en una responsabilidad individual o familiar.

4.1. La vulnerabilidad como nueva condición social

El envejecimiento de la población española, unido a la precariedad laboral y a la desigualdad económica, ha dado lugar a una nueva forma de vulnerabilidad estructural. No se trata ya solo

de carencias materiales, sino de la inseguridad existencial que nace de no poder confiar plenamente en los sistemas que deberían protegerte cuando más lo necesitas.

El adulto mayor —que dedicó su vida a contribuir al sistema público— se ve atrapado en una paradoja: la sociedad ha logrado prolongar la vida, pero no ha garantizado vivirla con seguridad, autonomía y sentido. La desigualdad territorial y la privatización de servicios amplifican esa sensación de abandono, generando un sentimiento social de “soledad institucional”.

4.2. Desconexión entre el tiempo biográfico y el tiempo político

Existe también una disonancia temporal entre la biografía de las personas mayores y los ritmos de la política pública. La vida del adulto mayor se mide en meses, mientras las respuestas institucionales lo hacen en años. La espera de una ayuda a la dependencia, una cita médica o una valoración de discapacidad se convierte así en un tiempo suspendido, donde cada retraso tiene un coste humano irreparable.

Esta asincronía entre el tiempo vital y el administrativo revela una pérdida de empatía estructural: un Estado que llega tarde, aunque finalmente cumpla, ya ha fallado en su función esencial de protección.

4.3. La erosión del contrato intergeneracional

Ambas crisis, sanitaria y asistencial, tienen un impacto directo sobre el pacto entre generaciones. La solidaridad que sostuvo durante décadas el Estado del Bienestar —los activos de hoy cuidando a los mayores de ayer— se debilita ante el discurso de la eficiencia y la lógica del mercado. Cuando la salud y el cuidado se privatizan o se recortan, el mensaje implícito es que la vejez deja de ser una responsabilidad colectiva. Este cambio cultural erosiona la confianza en el futuro: si el sistema no protege a quienes ya dieron, ¿por qué creará la juventud que lo hará cuando les toque recibir?

4.4. Dignidad y bien común: una reconstrucción necesaria

La defensa del adulto mayor no puede reducirse a una cuestión presupuestaria o técnica. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad y de modelo de sociedad. Revertir la vulnerabilidad estructural exige una reconstrucción ética del bienestar: recuperar la idea de que la sanidad, la dependencia y el cuidado son bienes comunes no negociables, pilares de cohesión y confianza mutua.

La vulnerabilidad del mayor nos interpela como espejo de nuestras propias fragilidades futuras. Cuidar, garantizar atención médica de calidad y proteger la autonomía no son concesiones, sino formas civilizadas de reconocernos unos a otros.

Evolución de diferentes elementos del Sistema Nacional de Salud y la Dependencia

Año	Pacientes en espera quirúrgica	Dias medios de espera	Gasto sanitario Millones de €	Gasto sanitario % PIB	Personas dependencia atendidas	Pendientes dependencia
2019	705.000	121	76.305	6	1.230.000	255.000
2020	691.000	130	83.480	7,2	1.270.000	270.000
2021	706.000	121	88.200	6,9	1.340.000	285.000
2022	742.000	123	92.072	6,8	1.390.000	290.000
2023	819.000	127	93.500	6,9	1.420.000	305.000
2024	846.583	126	96.000	7	1.450.000	310.000
2025	870.000	128	98.000	7,1	1.500.000	284.000

5. Conclusiones y líneas de acción

La situación del adulto mayor en España en 2025 es una radiografía del bienestar colectivo. Sanidad y dependencia, dos pilares del Estado social, atraviesan un momento de tensión que va más allá de los presupuestos: reflejan una crisis de prioridades. La salud y el cuidado, entendidos durante décadas como derechos universales, se ven cada vez más condicionados por la renta, la geografía y la lógica del mercado. El resultado es una sociedad que, al mismo tiempo que presume de longevidad, tolera la fragilidad de sus mayores. Esta contradicción define el principal desafío social del país: mantener la promesa de bienestar en una era de incertidumbre demográfica y económica.

5.1. Reforzar la sanidad pública como bien común

La sanidad pública no necesita reinventarse, sino reafirmarse. Su crisis no es técnica, sino política y moral.

- Garantizar su sostenibilidad requiere:
- Incrementar de forma estable el gasto sanitario hasta, al menos, el 7,5% del PIB, priorizando atención primaria, salud mental y prevención.
 - Revertir el proceso de privatización progresiva, reforzando la gestión pública directa y la transparencia en los conciertos.
 - Establecer un marco estatal de cohesión sanitaria, que reduzca las desigualdades entre comunidades autónomas y asegure estándares mínimos comunes.
 - Incorporar la dimensión geriátrica y comunitaria en todos los niveles asistenciales, anticipando las necesidades del envejecimiento.

5.2. Transformar el sistema de dependencia en una red de derechos

La atención a la dependencia debe dejar de ser un sistema asistencial fragmentado para convertirse en un ecosistema integrado de derechos y cuidados.

- Esto implica:
- Aumentar su financiación hasta el 1,5% del PIB, acercándola a la media europea.
 - Reducir drásticamente las listas de espera mediante la simplificación administrativa y la digitalización inclusiva.
 - Profesionalizar y dignificar el trabajo del cuidado, con salarios y formación adecuados.
 - Promover modelos de atención domiciliaria y de proximidad, que permitan a las personas mayores envejecer en su entorno.

- Impulsar una coordinación sociosanitaria real, que integre salud, dependencia y apoyo social en una misma planificación territorial.

5.3. Revalorizar el envejecimiento como inversión social

El envejecimiento no debe verse como un problema, sino como una oportunidad de desarrollo social y humano. Los mayores son portadores de experiencia, cohesión y memoria colectiva. Invertir en su bienestar es invertir en la estabilidad del país. La educación continua, la participación social y las políticas de envejecimiento activo deben situarse en el centro de las agendas públicas, reconociendo al adulto mayor como sujeto de derechos, no como objeto de asistencia.

5.4. Hacia un nuevo pacto por la dignidad

El Observatorio Social concluye que la reconstrucción del bienestar pasa por un nuevo pacto por la dignidad. Un pacto intergeneracional y político que devuelva al espacio público el valor del cuidado, que garantice la equidad territorial y que reconstruya la confianza ciudadana en las instituciones. No se trata solo de curar enfermedades o financiar servicios, sino de restaurar el sentido de pertenencia y justicia que da cohesión a una comunidad. Cuidar al mayor es cuidar la memoria del país; y hacerlo con dignidad es afirmar que, incluso en tiempos de incertidumbre, el bienestar sigue siendo una promesa compartida.

Pensiones, la sostenibilidad del sistema público



El renacer del sistema público de pensiones: sostenibilidad, justicia y cohesión social

Durante años, se ha repetido casi como un mantra que el sistema público de pensiones estaba condenado al colapso. Se presentaba la demografía como una amenaza insalvable y la sostenibilidad como una palabra mágica que, en la práctica, escondía un proyecto de privatización. Sin embargo, los resultados tras la última gran reforma del sistema demuestran lo contrario: el sistema público no sólo es viable, sino que puede ser una poderosa herramienta de equidad, cohesión y futuro.

Una reforma que refuerza la sostenibilidad

Las últimas medidas adoptadas han introducido un modelo de financiación más justo y equilibrado, ampliando la base contributiva y creando mecanismos automáticos de ajuste que garantizan estabilidad sin sacrificar derechos. El refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el incremento de las cotizaciones por parte de las rentas más altas y la vinculación de las pensiones al IPC han devuelto al sistema su lógica social y económica: quien más tiene, más aporta; quien más lo necesita, más recibe.

Los datos son contundentes. Los ingresos de la Seguridad Social han crecido por encima de las previsiones, el Fondo de Reserva comienza a recuperarse, y la relación entre cotizantes y pensionistas se mantiene estable gracias al aumento del empleo y la formalización laboral. Lejos del catastrofismo, la evidencia muestra que la sostenibilidad depende más de la calidad del empleo que del número de jubilados.

Pero hay un elemento esencial que no puede ignorarse: sin salarios dignos, no hay pensiones dignas. El fortalecimiento del sistema pasa necesariamente por un mercado laboral de calidad, con empleos estables, cotizaciones completas y sueldos que crezcan al ritmo de la productividad. No se trata solo de justicia laboral, sino de sostenibilidad estructural. Incrementar los salarios no es un lujo, es una condición de futuro.

El sistema público como escudo contra la pobreza y la desigualdad

El sistema de pensiones no es sólo una fórmula contable, es una de las políticas redistributivas más poderosas que existen. Cada euro transferido a través de las pensiones públicas tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, especialmente entre las personas mayores. En España, sin ellas, más del 40% de la población jubilada estaría por debajo del umbral de pobreza. Con ellas, la tasa se reduce a menos del 15%.

Por eso, hablar de sostenibilidad no puede limitarse a los balances actuariales. La verdadera sostenibilidad es social, y consiste en garantizar que las personas mayores vivan con dignidad, independencia y participación. Cada pensión pública es también una inversión en estabilidad, en consumo interno y en cohesión intergeneracional.

Una barrera frente al edadismo y los conflictos generacionales

En una sociedad que envejece, las pensiones pueden ser un punto de fractura o un eje de solidaridad. Si se presentan como una carga para los jóvenes, se alimenta el resentimiento y el edadismo; si se explican como un derecho que mañana ellos mismos disfrutarán, se construye comunidad. El sistema público de pensiones no enfrenta generaciones, las une. Además, garantiza que la vejez no sea sinónimo de vulnerabilidad ni dependencia, sino una etapa plena y digna de la vida.

Lo que aún falta por hacer

No obstante, el camino hacia una justicia plena está lejos de completarse. Las pensiones mínimas siguen siendo insuficientes para garantizar una vida por encima del umbral de pobreza, y la brecha de género continúa siendo un reflejo de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral. Corregir estas dos carencias debería ser la próxima prioridad política: elevar las pensiones más bajas y reconocer plenamente los periodos de cuidados, mayoritariamente asumidos por mujeres.

Contra el relato de los “juntaletras del apocalipsis”

Frente a los resultados positivos y verificables, persisten los mismos “juntaletras” que desde tribunas mediáticas insisten en el fracaso del sistema público. Son los heraldos de un negocio: el de los fondos privados, las aseguradoras y los lobbies financieros que ven en la incertidumbre una oportunidad de mercado.

Defienden la privatización con el disfraz de la responsabilidad, pero omiten un dato esencial: donde se ha privatizado, la desigualdad ha aumentado. Chile, paradigma del modelo individualista, muestra tasas de pobreza en mayores que duplican las europeas. Y el caso de los fondos de pensiones privados de General Motors en Estados Unidos es otro ejemplo elocuente: cuando el gigante automotriz quebró, miles de trabajadores vieron evaporarse sus ahorros y sus sueños de jubilación. El mercado no garantiza dignidad; la política pública, sí.

Conclusión: un pacto social para el futuro

La reforma del sistema público de pensiones ha demostrado que la sostenibilidad no se logra recortando derechos, sino reforzando la solidaridad. El reto ahora no es sólo mantenerlo, sino hacerlo más justo y más inclusivo. Porque un país que cuida a sus mayores, que respeta el trabajo de toda una vida y que protege frente al riesgo de pobreza, no sólo defiende su pasado, sino que asegura su futuro.

Pensionistas que malviven en la pobreza

Categoría	Pensionistas
En riesgo de pobreza	3.820.000
En pobreza severa	1.570.000
Total	5.390.000

Pensiones públicas 2025. Sostenibilidad

Tres pilares, cifras y argumentos para entender la robustez del sistema y su horizonte de sostenibilidad.

Idea central. El sistema público de pensiones presenta una posición de fortaleza apoyada en tres pilares:

- Una base recaudatoria creciente y mejor distribuida;
- El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que recapitaliza la reserva;
- Y la separación de fuentes, que ordena las cuentas y reduce la incertidumbre.

Tres mensajes clave.

La sostenibilidad del sistema hoy es una realidad basada en hechos ciertos: por un lado el acumulado anual reciente muestra superávit -salvo estacionalidad de fin de ejercicio-, con ingresos no financieros por encima del gasto, por otro lado, sirve de colchón para el relevo generacional, el MEI aporta un flujo finalista y predecible al Fondo de Reserva, que vuelve a crecer con intensidad. Y finalmente, las cuentas por fin están separadas y son claras: la separación de fuentes consolida que lo contributivo se financia con cotizaciones y lo no contributivo con impuestos.

Cifras que lo explican (enero–agosto 2025):

- Saldo del sistema: +6.059 M€ (equivalente al 0,4% del PIB).
- Ingresos no financieros: 159.169 M€ (+9,3% interanual).
- Gastos no financieros: 153.110 M€ (+6,4% interanual).
- Cotizaciones sociales: 117.248 M€ (+6,8%).
- MEI recaudado: 3.237 M€ (+32,5% interanual).
- Transferencias totales: 40.011 M€ (de ellas 36.583 M€ del Estado; +18,1%).
- Fondo de Reserva estimado fin 2025: 14.000 M€.

Conclusión: la reforma del sistema público de pensiones ha cambiado la inercia, mejores ingresos, hucha reconstruida y perímetros contables limpios. El sistema es sostenible hoy y más resiliente para mañana.

Contexto y fotografía del sistema.

Tras un ciclo de deterioro del fondo de reserva, la hucha de las pensiones (2012–2019), desde 2023 se observa un cambio de régimen: convergen el aumento del empleo formal, el avance gradual de bases máximas y una aportación solidaria por los tramos salariales altos, junto con el

MEI, que institucionaliza el ahorro intergeneracional. La separación de fuentes elimina ruido contable y permite evaluar la salud del pilar contributivo con mayor precisión.

La fotografía actual es nítida: la Seguridad Social ingresa más de lo que gasta en el acumulado anual reciente, la hucha de las pensiones vuelve a crecer y el reparto de cargas entre cotizaciones y Presupuestos del Estado está mejor ordenado. No es casualidad; es el resultado de una reforma con tres pilares que han cambiado la inercia del sistema.

Los tres pilares en detalle.

Pilar 1 — Base recaudatoria: más y mejores ingresos por cotización.

Qué es.

Conjunto de medidas y dinámicas que incrementan y estabilizan los ingresos por cotizaciones: empleo formal, actualización de bases máximas y cuota de solidaridad para salarios por encima del tope.

Cómo funciona.

Elasticidad positiva al ciclo real: a más empleo y salarios, más base de cotización. Progresividad en la cima salarial: la cuota de solidaridad captura capacidad contributiva adicional sin distorsionar la estructura del sistema. Deslizamiento de bases máximas: acompasa el crecimiento de salarios altos, evita erosión relativa de ingresos.

Cotizaciones sociales: 117.248 M€ (+6,8%). Dentro de ellas, cotizaciones de ocupados 110.685 M€ y de desempleados 6.562 M€ (ambas en torno a +6,8/6,9% interanual).

Riesgos a vigilar. Desaceleración del empleo, brecha de productividad y efectos de composición sectorial.

Mitigación de los riesgos: políticas activas de empleo, impulso a productividad y continuidad del calendario de bases.

El primer pilar es la base recaudatoria.

Dos factores tiran de ella:

Más empleo formal y aquellos salarios que cotizan por encima de los mínimos. Bases máximas que se deslizan gradualmente hacia arriba y la cuota de solidaridad que aporta por la parte del salario que supera el tope de cotización. El efecto conjunto es doble: estabiliza la relación entre cotizantes y pensionistas hoy y ancla una senda de ingresos que crece con la economía y con la calidad del empleo, no solo con la cantidad.

Las cifras que lo explican (enero–agosto 2025):

- Saldo del sistema: **+6.059** m.€, equivalente al **0,4%** del PIB.
- Ingresos no financieros: **159.169** m.€, **+9,3%** interanual.
- Gastos no financieros: **153.110** m.€, **+6,4%** interanual.
- Cotizaciones sociales: **117.248** m.€, **+6,8%**.
- MEI recaudado: **3.237** m.€, **+32,5%** interanual.
- Transferencias totales: **40.011** m.€, de ellas **36.583** m.€ del Estado; **+18,1%**.
- Fondo de Reserva estimado 2025: **14.000** m.€.

Pensiones públicas 2025. Sostenibilidad

Pilar 2 — MEI y reconstrucción del Fondo de Reserva.

Trayectoria del MEI (M€):
2023: 2.218
2024: 3.711
2025 (ene–ago): 3.237
Total acumulado 2023–2025 (a agosto): ≈9.166 M€.

Tras el vaciado del Fondo de Reserva en el periodo 2012–2019, la hucha se recompone desde 2023. El perfil de aportaciones del MEI y los rendimientos financieros de la cartera de inversiones proyectan un colchón creciente durante la década de mayor relevo generacional.

Riesgos a vigilar. Choques de mercado que afecten rendimientos, rigidez del gasto en escenarios de estrés.
Mitigación de los riesgos: mandato de inversión prudente, diversificación y reglas de uso contracíclicas.

MEI y reconstrucción del Fondo de Reserva

El segundo pilar es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización finalista que alimenta directamente el Fondo de Reserva. La clave no es solo que recaude, sino cómo:

- Es un ingreso predecible y anticíclico: crece cuando la economía va bien y, llegado el relevo generacional más intenso, proporciona un colchón financiero para suavizar tensiones.
- Reduce la incertidumbre: el sistema ya no afronta los picos demográficos únicamente con ingresos corrientes; lo hace también con ahorro acumulado y gobernado con reglas.

Dicho de otro modo: el MEI compra tiempo y estabilidad para transitar la jubilación de las cohortes más numerosas sin recurrir a recortes.

Pilar 3 — Separación de fuentes: cada euro, en su sitio

Qué es. Criterio de gobernanza que establece que prestaciones contributivas se financian con cotizaciones y gastos impropios/no contributivos se atienden con Presupuestos del Estado.

Efectos.
1.Transparencia: permite evaluar la “salud” del subsistema contributivo sin ruido.

- 2.Equidad intergeneracional: evita que cotizantes financien partidas ajenas a la naturaleza del seguro social.
- 3.Estabilidad presupuestaria: reparte el esfuerzo entre cotizaciones e impuestos con reglas claras.

Cifras 2025 (ene–ago):
• Transferencias totales 40.011 M€; de ellas 36.583 M€ del Estado (+18,1%).

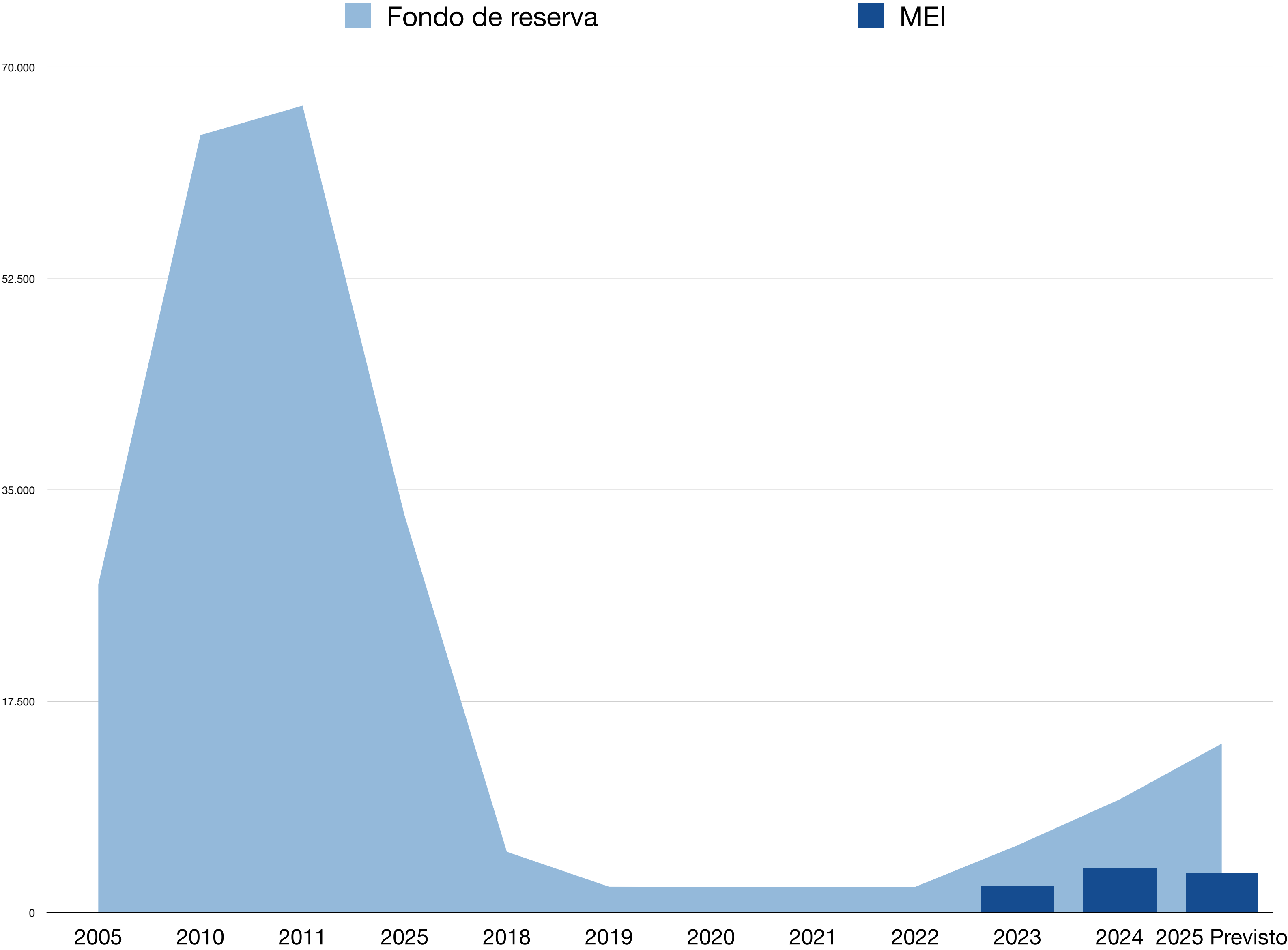
Resultado: perímetro contributivo más limpio y predecible.
Riesgos a vigilar. Tentación de volver a introducir gastos impropios por vía normativa.
Mitigación de los riesgos: auditorías periódicas y memoria económica ex ante para toda nueva obligación.

El tercer pilar es contable y de gobernanza, pero su impacto es enorme: la separación de fuentes.

- Las prestaciones contributivas se financian con cotizaciones.
- Los gastos impropios (complementos y políticas no estrictamente contributivas) se atienden con Presupuestos del Estado.
- Este reparto aclara las cuentas, evita cargar a las cotizaciones lo que no les corresponde y permite evaluar con transparencia la salud real del sistema contributivo.

Mitos y realidades.

- Mito 1: “No hay ingresos suficientes.”
Realidad: las cotizaciones crecen al 6,8% interanual con mejor mix salarial y aportación solidaria de rentas altas.
- Mito 2: “La demografía obliga a recortar.”
Realidad: el MEI provee ahorro específico para suavizar el pico demográfico, reduciendo la necesidad de ajustes abruptos.
- Mito 3: “Las cuentas ocultan un agujero.”
Realidad: la separación de fuentes limpia el perímetro contributivo y disciplina el uso de impuestos para gastos no contributivos.



Evolución Fondo de Reserva y MEI

Año	F. de Reserva	MEI
2005	27.185	
2010	64.375	
2011	66.815	
2025	32.841	
2018	5.043	
2019	2.153	
2020	2.138	
2021	2.138	
2022	2.141	
2023	5.578	2.218
2024	9.377	3.711
2025	14.000*	3.237**

*Las cifras del Fondo de Reserva de 2025 son provisionales.
**Las cifras del MEI de 2025, son las recaudadas de enero a agosto.

Pensiones públicas 2025. Sostenibilidad

Escenarios, riesgos y salvaguardas.

Escenario base 2025–2030. Positivo.

El escenario actual nos indica que el empleo se mantendrá creciendo moderadamente; la productividad mejorando por la digitalización el impacto de la IA y el desarrollo del capital humano, en esta línea es predecible que las cotizaciones sociales continúen avanzando en línea con los salarios; el MEI acumulando colchón; y el fondo de reserva acercándose progresivamente a niveles de confort.

Escenario estrés (desaceleración 2026–2027). Negativo.

Se puede producir una caída transitoria del empleo: lo cual generaría un menor ritmo de cotizaciones, esto nos obligaría al uso parcial y temporal del Fondo de Reserva dentro de las reglas que hoy lo rigen; es obligatorio que se mantenga la preservación de credibilidad manteniendo el calendario del MEI y la disciplina de separación de fuentes.

Salvaguardas recomendadas.

- Reglas de uso de la reserva (umbrales, pasarela cíclica).
- Mandato de inversión prudente con límites de concentración y horizonte de largo plazo.
- Revisión bienal de gastos impropios y auditoría independiente.
- Agenda de productividad (formación, digitalización Pymes, I+D) para sostener bases de cotización.

Recomendaciones de política pública.

- Mantener el calendario de bases máximas y la cuota de solidaridad, evaluando impactos competitivos sectoriales y corrigiendo desalineaciones puntuales.
- Blindar normativamente la separación de fuentes con un anexo de “gastos impropios” y eliminación automática de desviaciones.
- Política de inversión del Fondo de Reserva: enfoque a largo plazo, diversificación, gestión de riesgos y transparencia trimestral.
- Refuerzo de empleo y productividad: reducir temporalidad, impulsar FP y recalificación, incentivos a inversión en capital tecnológico.

- Panel público de indicadores (mensual/trimestral) con: cotizaciones, MEI, saldo, rendimientos de la reserva y ratio cotizante/pensionista.

El sistema de pensiones es un seguro social que se actualiza con la economía real. Hoy ofrece señales claras de sostenibilidad gracias a tres estabilizadores que ya están operativos. La prioridad es perseverar: empleo de calidad, ahorro intergeneracional y cuentas nítidas. Con estos pilares, España encara el reto demográfico no desde el miedo, sino desde la gestión. Los Tres pilares que hemos analizado: cotizaciones, MEI y separación de fuentes, explican la fortaleza actual y blindan la transición demográfica.

- Superávit acumulado y cotizaciones al alza (+6,8%).
- MEI con aportación acumulada >9.100 M€ desde 2023.
- Fondo de Reserva en reconstrucción: 9.377 M€ (2024) y rumbo a 14.000 M€ (2025).

Tres preguntas que nos pueden inquietar y tres respuestas que nos tranquilizan:

¿Puede haber déficit al cierre? Es posible por el motivo de la estacionalidad; que ya hemos analizado, pero esto no debe alterar la tendencia estructural y la sostenibilidad del sistema en el futuro.

¿El MEI es suficiente por sí solo? No; el MEI es un excelente estabilizador que funciona junto a la mejora del empleo/productividad, el incremento de los salarios, asignatura pendiente, y la disciplina contable.

¿Privatizar resolvería algo? No; trasladaría riesgos al individuo, reduciría la solidaridad del sistema y no aborda la raíz demográfica/productiva.

Qué mirar a partir de ahora

La sostenibilidad no es un eslogan, es una práctica, para mantenerla, conviene vigilar tres elementos que ya hemos tratado con anterioridad:

- Calidad del empleo, mejoras salariales y productividad: sostienen la recaudación sin penalizar la competitividad.
- Ejecución del MEI y política de inversiones del Fondo de Reserva: prudencia, diversificación y horizonte de largo plazo.
- Disciplina en la separación de fuentes: mantener limpio el perímetro contributivo y evaluar periódicamente los gastos impropios.

Recaudación del MEI (cotización finalista)

Año	Recaudación MEI (€, millones)	Fuente / notas
2023	3.200	el Fondo de Reserva aumentó 3.438 mM en 2023 "gracias en gran medida al MEI"; además, 710 mM entraron por MEI ene-abr 2023. Escalando por tipo (0,6% en 2023 vs 0,7% en 2024) y empleo, el MEI de 2023 se aproxima a 3.2 mM.
2024	3.711	Dato oficial anual: "los ingresos correspondientes al MEI alcanzan 3.711 millones de euros (diciembre 2024)".
2025	3.237 (acum. a agosto)	Último acumulado oficial publicado por Moncloa (ejecución hasta ago-2025). Hitos previos: 1.955 mM a mayo y 2.374 mM a junio. Proyección ministerial para 2025 en torno a 4.4 mM.

Observatorio Social 2025

3º Trimestre

